

C.A. de Santiago

Santiago, seis de marzo de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

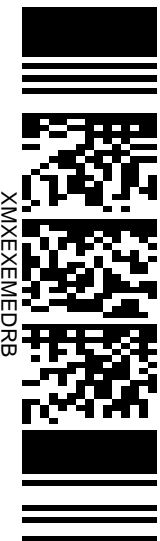
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigésimo segundo, que se suprime.

**Y teniendo, en su lugar y, además, presente:**

1º) Que por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el 28º Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-3037-2021, caratulada “*Araneda con Fisco/Consejo de Defensa del Estado*”, se rechazaron las excepciones de reparación integral y de prescripción, opuestas por el Fisco de Chile y se acogió parcialmente la demanda deducida el 29 de marzo de 2021, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a los demandantes Marta Silvia Bernardita Soto González, Carlos Alberto Araneda Miranda y Simón Alberto Araneda Soto, a título de indemnización por daño moral la suma de \$ 100.000.000.- (cien millones de pesos) más reajustes e intereses en la forma dispuesta en el fundamento vigésimo tercero de esa sentencia, sin costas.

2º) Contra la aludida sentencia dedujo recurso de apelación el Fisco de Chile, solicitando que se revoque el fallo recurrido, declarando que se rechaza íntegramente la demanda interpuesta en autos; en subsidio, que se rebaje sustancialmente los montos fijados a título de indemnización por daño moral a la suma que esta Corte se sirva fijar.

Por su parte, los demandantes, en esta instancia, dentro del plazo legal, se adhirieron a la apelación, pidiendo confirmar la referida sentencia, con declaración que se eleva el monto



indemnizatorio a la suma de \$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes o a la suma mayor que la fijada en primera instancia que esta Corte considere prudencial acorde al mérito del proceso.

**I.- En cuanto al recurso del Fisco de Chile:**

3º) Que los argumentos de la apelación del Fisco son básicamente tres. El primero de ellos es rebatir lo decidido por la sentenciadora en los motivos décimo y undécimo del fallo impugnado, que reproduce, en cuanto desestima la excepción de reparación integral, insistiendo que con los antecedentes reunidos en el juicio, en particular el oficio del IPS, agregado en la instancia, y que da cuenta que los actores Soto González, Araneda Miranda y Araneda Soto han recibido por concepto de pensión y otros beneficios -respectivamente- las sumas totales de \$ 21.260.241.-, \$ 21.737.965.- y \$ 21.260.241.-, la juez de primer grado debió haber accedido a dicha excepción.

Por ello, estima que la sentencia no aplica correctamente lo que se deriva de las leyes N° 19.123, N° 19.992 y N° 20.874, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en este sentido, de lo cual se deriva que al haber recibido los demandantes beneficios en virtud de esa normativa, es incompatible pretender que el Fisco los indemnice nuevamente por el daño moral sufrido.

Un segundo agravio de la sentencia radica en haber desestimado el fallo la excepción de prescripción, por cuanto, en su concepto, debió acogerse dicha alegación, ya que en sede civil la acción intentada no es imprescriptible, como lo razona la sentencia; por el contrario, la acción civil deducida prescribe como cualquier acción de esa naturaleza y cita jurisprudencia al afecto.



El tercer agravio lo hace consistir en que el monto del daño moral regulado resulta excesivo, para lo cual compara la suma a que fue condenado su representado en esta causa con otros casos de torturas, por lo que pide la rebaja de esos montos.

4º) En lo que respecta al primer aspecto, concuerda esta Corte con el fallo en alzada, en los considerandos décimo y undécimo, ambos inclusive, en cuanto a que la indemnización por daño moral solicitada por esta vía es compatible con los beneficios y pagos ya percibidos por los demandantes, en virtud de la normativa antes citada, pues esta acción tiene por objeto demandar el daño propio, esto es el dolor, angustia y sufrimiento experimentado por ellos, a raíz del periodo en que estuvieron detenidos y procesados, en el cual fueron objeto de torturas y vejaciones por agentes del Estado, situación que fue reconocida por la Comisión Valech 2, que los incluyó como víctimas de torturas, con los N° 8.486 (Soto González), N° 505 (Araneda Miranda) y N° 511 (Araneda Soto), como se desprende de la nómina de prisioneros políticos y torturados, acompañada por los actores. De esta forma, solo cabe confirmar lo decidido en la sentencia en este aspecto.

En lo atinente a la prescripción extintiva, también concuerda este Tribunal de Alzada, con lo manifestado por la sentenciadora de primer grado en los motivos décimo tercero a décimo sexto, ambos inclusive, en el sentido que tratándose la tortura un crimen de lesa humanidad, proscrito por Tratados Internacionales vigentes en nuestro país, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención sobre la Imprescriptibilidad



de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, no cabe acoger la prescripción alegada por el Fisco.

En efecto, de todos esos instrumentos internacionales se deriva que la acción civil para pedir la reparación del daño causado a las víctimas, a consecuencia de las torturas que le fueron impuestas en su momento, es imprescriptible, razón por lo que no tienen aplicación las normas del derecho interno, en especial el Código Civil, toda vez que la fuente que da origen a la reparación descansa en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que deben ser aplicados con preferencia a las normas del Derecho Interno, por expreso mandato constitucional del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental.

En lo relativo a la prueba del daño moral, en relación a la actora Marta Soto González, teniendo presente el tiempo en que sucedieron los hechos, el periodo que experimentó las torturas, a partir del 7 de septiembre de 1983, las vejaciones, abusos sexuales, infecciones, dolores abdominales y sangramiento, unido a que dio a luz a su hijo Simón Araneda Soto en deplorables condiciones sanitarias, en un ambiente de constantes amenazas, permaneciendo recluida junto a su hijo hasta los 11 meses de vida, unido al reconocimiento por la Comisión Valech 2 de la calidad de víctima de torturas sufridas durante el encierro, los documentos agregados por esa parte son suficientes para corroborar el daño moral experimentado, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, en cuanto a su regulación.

Del mismo modo, en relación al actor Carlos Araneda Miranda, hay prueba suficiente para acreditar las torturas, por similares consideraciones que el anterior, en especial el lapso que



estuvo detenido y luego procesado, desde 7 de septiembre de 1983, en el cual fue víctima de golpes, perdiendo parte de su dentadura, más otros vejámenes, quien además es reconocido como víctima de torturas durante su encierro por la Comisión Valech 2.

Por último, la prueba aportada respecto del actor Simón Araneda Soto, quien nació al interior del centro de detención y torturas el 17 de abril de 1984 y que sufrió, junto a su madre Marta Soto, golpes y vejámenes, revela que también fue torturado en ese lapso siendo también reconocida por la Comisión Valech 2 como víctima de torturas.

## **II.- En cuanto al recurso del demandante:**

5º) Por su parte, los demandantes, al adherirse a la apelación, fundan su recurso en que el relato de los daños ocasionados a su representado, lo que no fue controvertido por la contraria, es desgarrador y da cuenta de un profundo daño que no se repara con el monto fijado en la sentencia.

A juicio del recurrente, sólo con la prueba documental reseñada queda suficientemente acreditado el daño moral severo de los demandantes, en el que cobra especial importancia el hecho de que se trata de daños permanentes. De este modo, y considerando que uno de los elementos a considerar para determinar el cuántum de la indemnización dice relación no sólo con el dolor ocasionado, sino también con la extensión del mal causado, en esta situación la extensión del mal no cesará sino hasta que la víctima termine sus días terrenales, como se demuestra en los informes evacuados por el Prais.

6º) A ese respecto, como ya se había indicado en el motivo cuarto de esta sentencia, en lo relativo a la demandante Marta Soto



González las circunstancias de haber sido golpeada, amenazada y, además, abusada sexualmente durante su encierro, más el hecho de haber dado a luz a su hijo en condiciones deplorables, producto de lo cual el niño tuvo sufrimiento fetal, conlleva a determinar que la regulación del monto del daño moral experimentado por éste sea más condigno con dichas circunstancias, razón por lo que esta Corte considera que debe regularse en una suma superior a la fijada en la sentencia recurrida, como se indicará en lo resolutivo.

En lo que se refiere a los actores Carlos Araneda Miranda y Simón Araneda Soto, concluye esta Corte que el monto del daño moral regulado por la juez de primer grado es el adecuado, atendida las circunstancias de sendos encierros, la detención de Araneda Miranda y secuelas sufridas por ambos.

Por los fundamentos precedentes, más lo previsto en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República; Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; artículos 1.698 y 2.314 del Código Civil y artículos 186, 223 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se **confirma** la sentencia apelada de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el 28° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-3037-2021, caratulada “*Araneda con Fisco/Consejo de Defensa del Estado*”, **con declaración** que se **eleva** el monto de la indemnización por daño moral que debe pagar el Fisco de Chile a la demandante Marta Silvia Bernardita Soto González, a la suma de **\$ 130.000.000.-** (ciento treinta millones de pesos).



Se **confirma**, en lo demás apelado, la aludida sentencia.

Regístrese y comuníquese.

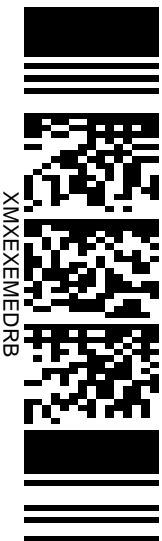
Redactó el ministro Tomás Gray.

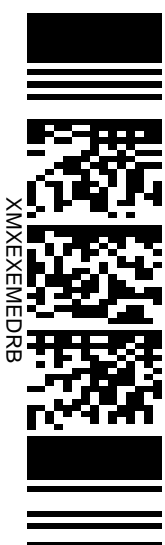
No firma la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus, por haber terminado sus funciones en esta Corte.

**Civil N° 15.069 -2022.**

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Illma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, seis de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



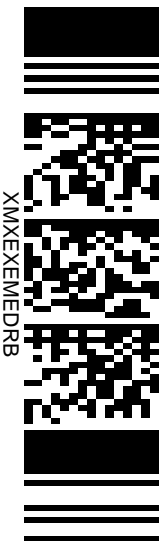


XMEXEMEDRB



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, seis de marzo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a seis de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.